

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 1º Juzgado Civil de Chillán
CAUSA ROL : C-511-2021
CARATULADO : ESTRADA/FISCO DE CHILE

Chillán, **dieciocho de mayo de dos mil veintidós.**

VISTOS:

A folio1, con fecha 01 de marzo de 2021, comparece don Juan Pablo Gallardo Parada, abogado, en representación de doña **SONIA ALICIA ESTRADA PARODI**, dueña de casa, con domicilio en calle Calfuray N°14, conjunto residencial Los Aromos, comuna de Chiguayante, interponiendo demanda civil de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra del Estado, persona jurídica de derecho público, representada por el **CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO**, a través de su Abogado Procurador Fiscal doña **Mariella Ximena Paulina Dentone Salgado**, **o quien la reemplace o subrogue legalmente**, todos con domicilio en Dieciocho de septiembre N°329, comuna de Chillán, en razón de haber sometido a detención y tortura a su representada, cuyas graves consecuencias permanecen hasta el día de hoy, incumpliendo el Estado de Chile sus propias leyes y los convenios internacionales que protegen el derecho de las personas, provocando un daño de tal entidad, que solo puede ser reparado en parte, por la condena al pago de indemnización de perjuicio.

Contextualizando, relata que el 11 de Septiembre de 1973, un grupo importante de militares y civiles, se hicieron del poder en Chile, mediante el uso de la fuerza, derrocando al presidente electo, con el objeto de “restablecer la chilenidad justicia y la institucionalidad quebrantada” sin que ninguno de los propósitos se cumplieron a cabalidad, dado que el 17 de diciembre de 1974 el Presidente de la Junta se autoproclamó por decreto Presidente de la República y a la Junta se le dieron atribuciones legislativas, se declaró en receso a los Partidos Políticos, iniciando una persecución masiva a los militantes y simpatizantes del sector de izquierda en todo el país para lo cual se utilizaron los recintos militares y policiales como centros de detención, se aplicó torturas y en definitiva se buscó la eliminación sistemática de los adversarios políticos. Explica que en este caso, el relato de la víctima es del siguiente tenor, “Para el año 1973 participaba en el partido comunista, era militante, vivía en Chillán, era dueña de casa, y su marido René Castillo era mecánico en lansa, era dirigente sindical. El día 21 de septiembre del año 1973 los fueron a buscar a su casa a las 2 de la mañana, ella tenía 26 años y tenía 2 hijos, de 8 el mayor y 6 la menor, ellos dormían en una cama al frente de la suya, golpearon, la patrulla se detuvo en la esquina, y golpearon la puerta, su padre les abrió, entraron en eso escucho “¿acá viven



René Castillo y Sonia Estrada?”, si les dijo su papá, y entonces escucho eso y les dije “si acá estamos ya luego bajamos”, pero subieron los carabineros, entraron a la pieza apuntando con las armas y sus dos hijos aterrados al frente sentados no sabían lo que estaba pasando, fueron a besar a los niños y les dijeron “no se despidan tanto de los niños” y tuvieron que bajar. Su papá le pidió al teniente, “por favor no se lleve a mi hija, tiene dos niños le dijo llévame a mí”, a lo que le respondieron “no señor si no es a usted a quien buscamos”, salieron a empujones y subieron a la patrulla. Llegaron a la comisaria, no sabe qué numero era pero es la principal de Chillán, la que está al frente a las monjas alemanas, los tomaron ahí en la sala de guardias y aquí están los encargados, entonces le dijeron usted viene conmigo y a ella la dejaron en la sala de guardia toda la noche, estuvo sentada toda la noche en la sala de guardia que se permitía ir a manosearla todas las veces que quiso, esa noche, le interrogó un teniente, ella negó todos los cargos porque no iba a negar su condición de comunista pero no ha participado en nada, “pero su esposo si, su esposo tenía armas, ¿eso no es cierto?” le decía, y sabe que hasta ahí llevo el interrogatorio, no se le queda en el tintero, entonces le dijo la van a llevar a su casa.

Su esposo quedó en la comisaria, al otro día iban a buscar a los que llevaban al regimiento pero a su esposo lo dejaron ahí y la segunda noche los sacaron a todos y fuera de ahí de la sala de guardia ahí los metían a unos tarros con agua, los golpeaban, en una corrió hacia la sala de guardia y le dijo “¿estás bien?, porque le han dicho tantas cosas, ¿qué te han hecho? Le iban a decir al calabozo que a ella le habían golpeado entre todos. A ella la llevaron afuera y le dijeron cierre los ojos y quédese quieta, dije prefiero esto a otra cosa, pero lo cerró tranquila porque lo único que quería era morir en ese momento, dispararon pero no le mataron le llevaron nuevamente a la sala de guardias, y pidió permiso para ir al baño y de ahí le empezó un ataque renal porque sufría a lietas renal y le era imposible restarse al dolor y gritar, ahí llegaba gente a dejarle cosas a carabineros, café, etc. Llegó incluso el papá de un doctor a agradecerles que habían salvado a la patria y entonces como se quejaba porque un cólico es muy doloroso. Antes llegó un capitán de apellido Estrada, y dijo “¿qué hace esta maraca aquí?, ah y es de apellido Estrada *ésta wna*, mas encima lleva mí mismo apellido”. Su marido estuvo 4 días detenido en la comisaría.

Su esposo se quedó en Chillán trabajando y ella vino con sus hijos y su padre sus hermanos se escondieron, su hermano menor que estudiaba en la UDEC vivía con ellos, pero en la semana estaba en las cabañas en la UDEC, a él lo llevaron a la Quiriquina, él se quedó en su casa en Chillán, con su mujer y sus hijos y viniendo a la UDEC. Él también tuvo problemas, y lo tomaron para que dijera donde estaba Raúl el otro hermano, a él lo llevaron al regimiento estuvieron 3 días con su padre en el regimiento. Eso fue en



Chillán. En Talcahuano a dos meses, después se fueron a Chillán, un día los fueron a buscar la DINA, ya en ese entonces su esposo se quedó en Chillán en la casa de sus padres, pero toleró ocho meses y lo echaron, su hermano al que buscaban no lo encontraron estuvo escondido en varias casas, porque lo querían matar. En Talcahuano fueron una vez y la querían llevar, a Talcahuano se fue con sus hijos, toda la familia, después se les unió su padre, arrendaban una casa en el cerro, menos su hermano que era buscado, a él lo sindicaron como el jefe de la brigada que hizo los murales.”

Luego con relación a los daños, la demandante desde el 21 de septiembre del año 1973, fue sometida a distintos tipos de torturas, que se pueden describir como: FISICAS: Fue subida a empujones a patrulla militar. PSICOLÓGICAS: Simulacro de fusilamiento, amenazas reiteradas de muerte, insultos reiterados, persecución permanente. SEXUALES: Fue tocada reiteradamente por funcionario militar. Los hechos descritos se encuentran reconocidos por el Estado de Chile; según consta en el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech) del Estado de Chile. Figurando su representada, en la lista de víctimas reconocidas por dicha comisión bajo el número 8.136 del primer listado. Además en el programa de reparación PRAIS, dependiente del Ministerio de Salud de Chile. Todo lo anterior dejó serias secuelas físicas y síquicas, las cuales son irreversibles. Además una vez que la dejaron ir, durante todo el resto del Gobierno Militar fue víctima de continuo acoso, vigilancia, tanto ella como sus seres más cercanos; fue objeto de persecución, es decir, sistemáticamente se encargaron de destruir su vida.

Dice que hasta el año 1980 rigió en nuestro país, la Constitución de 1925 norma fundamental que fue severamente trasgredida por los Gobernantes de la época. En efecto se vulneró el Art. 13, 14, 15, 18 inciso segundo que transcribe; agrega que existe numerosa legislación internacional, Tratados, Convenciones, Declaraciones y Actas, que el Estado de Chile ha suscrito y se ha obligado a cumplir, en materia de protección de los derechos humanos, cuya trasgresión a la fecha del relato de los hechos, le valió la condena internacional y el nombramiento de un relator especial de las Naciones Unidas, de carácter casi permanente que informaba a la comunidad de las naciones, la evolución de los derechos humanos en Chile. Menciona la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, siendo sus normas “ius cogens”, forman parte del Derecho Internacional Público cuyo cumplimiento es imperativo, que no admite acuerdo en contrario o disposición del derecho positivo interno que la contravengan. Así se vulneraron además las disposiciones de la Declaración Universal de los DDHH, en el Art. 3 “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su



persona” , el Art. 5 “Nadie será sometido a Torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”, el Art. 8 “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violan sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la Ley” y el Art. 9 “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”. Y las normas vulneradas en el Pacto de San José son las del Art. 5 relativas al derecho a la integridad personal los números 1 y 2, el Art. 7 el derecho a la Libertad personal en todos sus números.

Para el cumplimiento de las disposiciones por los Estados parte, se establece una Comisión quien recibe las denuncias y las tramita y propone una solución amistosa, si el Estado denunciado no las acoge, el afectado puede ocurrir a la Corte Interamericana en un plazo de tres meses. El Art. 63 dispone “Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su Derecho o Libertad conculcado. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.

Expone, que la demanda se asila también en la actual Constitución, Art. 5 inciso segundo, la que reconoce la primacía de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana por sobre la soberanía del Estado, que este no solo debe respetar estos derechos, si no también promoverlos. Estos derechos se encuentran garantizados en esta Constitución como también en los tratados internacionales. En consecuencia, esta vulneración de derechos debe ser investigada, sancionados y reparado el daño causado, de otra manera se estará incumpliendo el mandato Constitucional. En esta misma línea, sobre responsabilidad del Estado, el Art. 38 inciso segundo, establece que cualquier persona lesionada en sus derechos por la acción del Estado o sus organismos puede reclamar ante los tribunales que determine la Ley. Invoca la responsabilidad civil del Estado, toda vez que sus agentes premunidos de la fuerza coactiva que éste les entregó cometieron actos delictuales, transgrediendo la normativa invocada. A continuación, cita jurisprudencia la Corte de Apelaciones de Santiago, de la Excma. Corte Suprema, concluyendo que la responsabilidad civil del Estado se verifica y concretiza mediante el concepto de falta de servicio, al cual resulta aplicable también las normas de derecho común en cuanto no sean incompatible con el aquel estatuto jurídico, entre ellas las contenidas en los artículo 2314 y siguientes del Código Civil, sobre responsabilidad extracontractual.



Finalmente, en base a todo lo expuesto pide tener por interpuesta demanda civil de Indemnización de Perjuicios por daño moral en base a la responsabilidad civil extracontractual del Estado, representado por el Consejo de Defensa del Estado, y en concreto se condene a pagar a la demandante la suma de \$200.000.000. En **subsidio**, las sumas menores que el tribunal determine conforme al mérito del proceso, en ambos casos, con costas, reajustes e intereses corrientes desde la fecha de dictación de esta sentencia, o en subsidio, con los reajustes e intereses que se determine conforme a Derecho.

A folio 10, con fecha 30 de abril de 2021, doña Mariella Dentone Salgado, Abogado Procurador Fiscal de Chillán del Consejo de Defensa del Estado, por el **FISCO DE CHILE**, persona jurídica de derecho público, ambos domiciliados para estos efectos en calle dieciocho de septiembre N° 329, ciudad de Chillán, contestó la demanda civil de indemnización de perjuicios deducida, solicitando, su total rechazo en base a las excepciones, defensas y alegaciones que se exponen a continuación de manera sintetizada.

Opone en primer lugar la excepción de reparación integral, e improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizada la demandante. En este contexto explica que, para comprender el régimen jurídico de este tipo de reparaciones por infracciones a los Derechos Humanos ha de posicionarse en el panorama jurídico nacional e internacional, en el contexto de la “Justicia Transicional”. Sólo desde esa óptica puede mirarse en mejores condiciones los valores e intereses en juego. En efecto, el denominado dilema “justicia versus paz” es, sin lugar a dudas, uno de los pilares sobre los cuales descansa el edificio de aquella justicia transicional. Argumentos en favor de amnistías generales que porten la necesaria tranquilidad a un país, deben lidiar con la imperiosa necesidad de que una sociedad se mire a sí misma y reconozca los errores del pasado para así pronunciar aquel imperioso “nunca más”. En esta perspectiva, las transiciones son, y han sido siempre, medidas de síntesis mediante las cuales determinadas sociedades, en específicos momentos históricos, definen las proporciones de sacrificio de los bienes en juego al interior de aquel profundo dilema. Por otro lado, no debe olvidarse que, desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada en que el éxito de los procesos penales se concentra sólo en el castigo a los culpables no preocupándose del bienestar de las víctimas. En este sentido, las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Este concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las Comisiones de Verdad o Reconciliación proponen como programas



de reparación. Estos programas, en efecto, incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero. En atención a la complejidad reparatoria los objetivos de la justicia transicional fueron “(a) el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura; (b) la provisión de reparaciones para los afectados; y (c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones no puedan volver a producirse”. En lo relacionado con aquel segundo objetivo, la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, o también llamada Comisión Rettig, en su Informe Final propuso una serie de “propuestas de reparación” entre las cuales se encontraba una “pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas” y algunas prestaciones de salud, sirviendo de base de la posterior dictación de la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación que buscaba “reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”. Entendiendo la idea de reparación *"un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho Informe"*. A dicha reparación ha de ser convocada y concurrir toda la sociedad chilena, en “un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas”. Compensación de daños morales y mejora patrimonial, son así dos claros objetivos de estas normas reparatorias. Asumida esta idea reparatoria, la ley 19.123 y, demás normas conexas (como la ley 19.992, referida a las víctimas de torturas) han establecido los distintos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación, exhibiendo aquella síntesis que explica cómo nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional que han consistido en tres tipos de compensaciones, a) reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y) reparaciones simbólicas. En relación con las primeras, la ley 19.123 estableció una pensión vitalicia para el cónyuge sobreviviente, la madre del causante o el padre de éste cuando aquella faltare o renunciare, la madre de los hijos de filiación no matrimonial del causante o el padre de éstos cuando aquella fuere la causante y los hijos menores de 25 años de edad, o discapacitados de cualquier edad, incorporándose al padre como beneficiario no sólo cuando la madre faltare, sino también cuando ella haya dejado o dejare de percibir la pensión por renuncia o fallecimiento e incrementó a un 40% el beneficio reparatorio para la madre o el padre de los hijos de filiación no matrimonial del causante por la Ley 19.980, significando para el Estado un costo que a diciembre de 2019, era de \$992.084.910.400.



Siguiendo, desde una perspectiva indemnizatoria, y tal como se indicó en la historia de la ley 19.123 y sus modificaciones sobre prisioneros y torturados políticos, estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la nómina de personas reconocidas como víctimas. Así, se estableció una pensión anual ajustable de \$1.353.798.- para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284, para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$1.549.422.- para beneficiarios mayores de 75 años de edad.

Se contempló también la reparación mediante la asignación de nuevos derechos. La ley 19.123 ha incorporado en el patrimonio de los familiares de las víctimas de DDHH los siguientes derechos:

a) Todos los familiares del causante tendrán el derecho de recibir de manera gratuita las prestaciones médicas incluidas en el Régimen General de Garantías en Salud y las derivadas de embarazos. En general este tipo de beneficios han sido agrupados en el denominado Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS). Ciertamente, dicho programa es parte de una Política Pública de Reparación asumida por el Estado de Chile con las personas víctimas de violaciones a los derechos humanos en el periodo de septiembre de 1973 a marzo de 1990, según se dispone en las leyes 19.123, 19.980, 19.992 y 20.405. En este sentido, las personas acreditadas como beneficiarias del Programa, tiene derecho a la gratuidad de las prestaciones médicas que se otorgan en todos los establecimientos de salud de la red asistencial pública, independiente de la previsión social que sostengan, accediendo a toda la oferta de atención de salud que otorga el sector. A nivel presupuestario, PRAIS cuenta con un financiamiento de continuidad desde el año 2006, teniendo al año 2020 un incremento presupuestario importante, siendo el presupuesto global de M\$6.543.883. Sin perjuicio de ello, como usuarios del sistema público de salud, los beneficiarios adquieren los derechos establecidos equivalentes para todos los usuarios FONASA; obtienen el derecho de organizarse y participar en los consejos de participación que la ley de Autoridad Sanitaria crea, tanto en los establecimientos como a nivel de la red y secretaría regional;

b) Los hijos de los causantes que sean alumnos de Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, sin aporte fiscal, y reconocidos por el Ministerio de Educación, tendrán un derecho al pago de la matrícula y del total del arancel mensual de cada establecimiento. Esta beca se encuentra normada por la Ley N° 19.123 y está destinada a los hijos de las personas declaradas víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política, de acuerdo con lo establecido por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, hasta los 35 años. En cuanto a la duración del beneficio, tratándose de aquellas carreras con una duración inferior a 5 semestres, el beneficio cubrirá hasta un semestre adicional. Para aquellas carreras con



una duración igual o superior a 5 semestres, el beneficio cubrirá hasta dos semestres adicionales. En este sentido, al 31 de diciembre de 2015 los desembolsos asumidos por el Estado de Chile, invocando los beneficios o becas, respecto a los familiares de las víctimas de DDHH, como alumnos de Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica ascienden a \$90.977.774.148.-

En cuanto a las Reparaciones simbólicas destinada a reparar los daños morales causados a las víctimas se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Por ejemplo, a) la construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago realizada en el año 1993; b) el establecimiento, mediante el Decreto N° 121, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 10 de octubre de 2006, del Día Nacional del Detenido Desaparecido el 30 de agosto de cada año; c) la construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. inaugurado el 11 de enero de 2010 y su objetivo es dar cuenta de las violaciones a los derechos humanos cometidas entre los años 1973 y 1990 y que quedaron plasmados en imágenes, íconos, documentos o monumentos; d) establecimiento, mediante Ley N° 20.405, del Premio Nacional de los Derechos Humanos; e) la construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país y en lugares especialmente importantes para el recuerdo de las Infracciones a los DDHH tales como Villa Grimaldi y Tocopilla, entre otras.

Por lo expresado, puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de DD.HH. han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional y han provisto indemnizaciones acordes con nuestra realidad económica que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales, como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los DDHH, por lo que la indemnización que se solicita en estos autos como el cúmulo de reparaciones antes indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado aquellos daños, no procediendo, por ello, ser compensados nuevamente. Cita jurisprudencia sobre el particular de la Excma. Corte Suprema, reconociéndose positivamente en el ámbito internacional la política de reparación de violaciones de Derechos Humanos desarrollada por Chile, a tal punto que la Corte Internacional de Derechos Humanos ha denegado otro tipo de reparación pecuniaria luego de tomar en consideración los montos ya pagados por el Estado por conceptos de pensiones, beneficios y prestaciones públicas como en el caso Almonacid que refiere. En el mismo sentido, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha considerado los beneficios de establecer un sistema compensatorio único para todas las víctimas que no genere desigualdades.

En segundo término, opone la Excepción de prescripción extintiva de la acción deducida



con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código. Especifica que conforme al relato efectuado por el actor, la detención ilegal, prisión política y tortura que sufrió, ocurrió a partir del 09 de octubre de 1973. Entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 13 de abril de 2021, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil, de 4 años pidiendo que en su virtud se rechace íntegramente la acción indemnizatoria deducida como consecuencia de ello, por encontrarse prescrita.

En subsidio, en caso de que se estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de la acción civil, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil.

Señala que, por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles. “Cuando no se establece la prescripción de un determinado derecho y tampoco su imprescriptibilidad, ese derecho, de acuerdo con la regla general, es prescriptible” siendo la imprescriptibilidad excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe y pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves y perturbadoras. Por eso es, que la jurisprudencia ha señalado que “para que un derecho de índole personal y de contenido patrimonial sea imprescriptible, es necesario que exista en nuestra legislación disposiciones que establezcan su imprescriptibilidad.”.

Sobre esta materia recuerda que la prescripción es una institución universal y de orden público resultando las normas del Título XLII del Libro IV del Código Civil, que la consagran, y, en especial, las del § Párrafo I, siempre de aplicación general a todo el derecho y no sólo al derecho privado. Entre estas normas está el artículo 2.497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado.

La responsabilidad que se atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tienen la misma finalidad: resarcir un perjuicio extrapatrimonial, en este caso, a través de un incremento patrimonial del afectado.

Comentando sobre los fundamentos de la prescripción, agrega que no hay conflicto alguno entre la Constitución Política y la regulación del Código Civil. Lo habría



si aquellos textos prohibieran la prescripción o si el derecho interno no admitiere la reparación vía judicial oportunamente formulada. En ausencia de ese conflicto, no hay contradicción normativa. Posteriormente cita en extenso, jurisprudencia sobre la prescripción aludiendo a la sentencia de unificación dictada por la Excma. Corte Suprema de 21 de enero de 2013, estableciendo el principio de la prescriptibilidad de la acción de responsabilidad civil, de modo que la imprescriptibilidad debe, como toda excepción, ser establecida expresamente y no construida por analogía o interpretación extensiva; también cita fallo de la Iltma., Corte de Apelaciones de Concepción.

A continuación, la representante del Fisco hace referencia a las normas contenidas en el Derecho Internacional en relación a la prescriptibilidad de la acción ejercida, afirmando, que ninguno contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia, incluyendo la “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad”, aprobada por Resolución N° 2.391 de 26 de Noviembre de 1968, y en vigor desde el año 1970; los Convenios de Ginebra de 1949, ratificados por Chile en 1951; la Resolución N° 3.074, de 3 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominada “Principios de Cooperación Internacional para el descubrimiento, el arresto, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes contra la humanidad”; Convención Americana de Derechos Humanos, sobre la cual al momento de ser ratificada, conforme al inciso 2° del artículo 5° de la Carta Fundamental, Chile formuló una reserva en orden a que el reconocimiento de la competencia, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere a hechos posteriores a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, de 21 de agosto de 1990, o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990.

De manera subsidiaria **en lo relativo a la naturaleza y monto de la indemnización reclamada demandado**, hace presente que el daño moral consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades inmateriales, lo que dependerá, de las secuelas sufridas con motivo de los hechos señalados en el libelo y de conformidad a los antecedentes que obren en autos en la etapa probatoria del mismo, por tanto, los llamados daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente lo que produce a su respecto una imposibilidad latente e insuperable de evaluación y apreciación pecuniaria. Señala que, en términos generales, la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso. Por ende, la indemnización del daño puramente moral no se



determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva. Así, la determinación del monto de la indemnización debe ser un procedimiento destinado a atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extrapatrimonial sufrida sin que se pueda invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues, el juez sólo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia estas capacidades. No habiendo norma legal que establezca una excepción relativa a la capacidad económica, habrá de estarse al principio general y básico de la cuantificación conforme a la extensión del daño, ni más ni menos, con absoluta prescindencia del patrimonio del obligado al pago. En tal sentido, las idénticas cifras pretendidas en la demanda como compensación del daño moral resultan *excesivas* teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia, que en esta materia han actuado con mucha prudencia. **También en subsidio** alega que, en su caso, la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales. De no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces; debiendo observarse en la fijación del daño moral como un parámetro válido los montos establecidos en las sentencias de los tribunales en esta materia, lo que implica rebajar sustancialmente los montos pecuniarios demandados.

Alega, asimismo, que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y además desde que dicha sentencia se encuentre firme o ejecutoriada, pues a la fecha de interposición de la demanda a tramitación, o de su notificación, y mientras no exista sentencia firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene el demandado, y por tanto no existe ninguna suma que deba reajustarse. Respecto de los intereses, el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia.

Sostiene que la jurisprudencia los tribunales superiores así lo han decidido de manera uniforme, determinando que “En los juicios sobre indemnización por responsabilidad extracontractual no puede considerarse en mora a la parte demandada mientras no se establezca por sentencia ejecutoriada su obligación de indemnizar y el monto de la indemnización. Por tanto, no procede en esta clase de juicios hacer extensiva la



demanda de cobro de intereses de la suma demandada o de la que se fije en el fallo que recaiga en el juicio.” Por consiguiente, el hipotético caso de que se decida acoger la acción de autos y condene al Fisco al pago de una indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su representado incurra en mora. Termina pidiendo rechazar la acción indemnizatoria en todas sus partes, con costas; o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

A folio 14, con fecha 05 de mayo de 2021, replicando, el actor primer lugar, reafirmó la posición de las acciones planteadas en el libelo. Manifiesta además en relación con la excepción de Reparación satisfactiva formulada por la demandada, no obstante el esfuerzo de la administración del Estado en dar ciertos reconocimientos a las víctimas de los daños que se reclaman en la especie y así paliar su sufrimiento, estos se hacían indispensables toda vez que los perjuicios inherentes a la tortura no sólo significaron el daño sufrido en el momento, sino que además fueron acompañados de una represión y vigilancia constante de los órganos del Estado durante todo el Gobierno Militar, lo que en concreto significó una evidente disminución de las oportunidades laborales, y de desarrollo; en este contexto la administración del Estado ha efectuado ayudas a esta víctimas, que en caso alguno pueden considerarse una indemnización propiamente tal, ni menos alguna que reemplace aquella que un órgano jurisdiccional pueda reconocer y tasar como daño moral. En este contexto hace presente que si la administración del Estado fue la causante de los daños, resulta curioso que la misma se irroque el derecho para determinar compensado aquellos actos, mediante ayudas que ha entregado. El hecho de ser una persona de derecho público no autoriza al Estado para declarar compensando los actos delictuales que sus agentes realizaron, mediante dádivas que el mismo ha determinado. Cita sentencia pronunciada por la Corte Interamericana de Justicia, que expresa el carácter complementario y no excluyente de reparaciones otorgadas en vías administrativa y judicial, doctrina que ha sido seguida por nuestros Tribunales de manera invariable estos últimos años. Sobre la excepción de prescripción refiere que un tema no pacífico en nuestra jurisprudencia, ha sido la normativa aplicable a la acción civil derivada de la responsabilidad del Estado frente al daño causado por sus agentes, con ocasión de un hecho que constituya un delito de lesa humanidad, en cuanto a si se deberían aplicarse las normas del Código Civil como forma de extinguir aquella acción indemnizatoria, sin embargo, aclara se ha impuesto la tesis de declarar la acción civil que nace de aquellos hechos como imprescriptible. Resulta crucial y determinante en la decisión tomada por nuestra jurisdicción nacional sobre el particular la sentencia de la Corte Interamericana de Derecho Humanos, en caso



“Órdenes Guerra y otros vs. Chile, Fondo y Reparaciones”, de fecha 29 de noviembre de 2018. Doctrina que ha sido seguida también por la Jurisprudencia interna de nuestro país, que considera que en caso de un delito de lesa humanidad, la faz indemnizatoria de aquel acto, no puede quedar en desmedro de la acción punitiva personal de sus autores, y en aquel contexto resultan inaplicables las normas de prescripción del Código Civil.

A folio 16, con fecha 13 de mayo de 2021, duplicando el Fisco de Chile ratifica el contenido de la contestación y reitera lo señalado en cuanto a la excepción de reparación satisfactiva, expresando que el daño moral ya ha sido indemnizado, por lo que procede se haga lugar a la excepción alegada; insistiendo sobre el marco general de las reparaciones ya otorgadas, el esfuerzo que ha realizado el Estado de Chile para compensar el daño producido a las víctimas, y en especial, respecto a las reparaciones percibidas por la demandante, sea en forma de transferencias directas en dinero, mediante la asignación de nuevos derechos sobre prestaciones estatales específicas y mediante el conjunto de reparaciones simbólicas mencionadas en la contestación, opuesta por esta parte.

Luego sobre la prescripción de la acción deducida, se reitera la importancia de la sentencia de unificación de jurisprudencia dictada por el pleno de la Excma. Corte Suprema con fecha 21 de enero de 2013 en los autos rol 10.665-2011 “Episodio Colegio Médico-Eduardo González Galeno” fallo en que se concluye que las acciones por responsabilidad extracontractual en contra del Estado prescriben en el plazo de cuatro años desde la perpetración de los hechos, conforme a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, resultando plenamente aplicable el artículo 2332 de Código Civil. Comenta además que se ha entendido que esta materia está regulada por el artículo 2497 del mismo cuerpo legal, que señala expresamente que las normas de prescripción *“se aplican igualmente a favor y en contra del Estado”*. Asimismo, que la Excma. Corte ha dejado claramente establecido que los tratados internacionales sobre derechos humanos no impiden en modo alguno la aplicación del derecho interno, específicamente las normas sobre prescripción de la acción civil. En el fallo ya señalado, dictado por el Pleno de la Excma. Corte Suprema, queda claramente establecido que ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni la Convención de Ginebra contienen normas que declaren imprescriptible la acción civil o impidan a cada Estado aplicar su legislación interna sobre la materia.

A folio 18, se recibió la causa a prueba, siendo notificada por cédula la apoderada de la parte demandada a folio 22, resolución con fecha 02 de julio de 2021 y teniéndose por notificado tácitamente al apoderado de la parte demandante, a folio 25, con fecha 27 de diciembre del mismo año, rindiéndose la prueba que obra en autos.



A folio 73, con fecha 07 de marzo de 2022, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a folio 1, comparece don Juan Pablo Gallardo Parada, abogado, en representación de doña **SONIA ALICIA ESTRADA PARODI**, interponiendo demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra del **FISCO DE CHILE**, todos ya individualizados, en razón de haber sido víctima de hechos constitutivos de vulneración a los derechos humanos, consistentes en su detención ilegal y arbitraria en el año 1973, oportunidad en que fue además sometida a torturas por agentes del Estado, y persecución política permanente durante el periodo, hechos que causaron en ella graves perjuicios físicos y psicológicos cuyas consecuencias padece hasta el día de hoy, demandando a título de resarcimiento del daño moral la suma de \$200.000.000 o la cantidad menor que se determine conforme al mérito del proceso, mas reajustes, intereses y el pago de las costas del juicio, en base a los fundamentos de hecho y derecho extensamente expuestos precedentemente.

SEGUNDO: Que, a tal pretensión el Fisco de Chile, a folio 10, se opuso pidiendo el rechazo íntegro de la demanda, en subsidio, busca la declaración de prescripción de la acción civil. Y, en caso de ser desestimadas tales alegaciones, pide rebaja del monto demandado, todo ello en conformidad a las alegaciones, excepciones y defensas contenidas y reproducidas por el tribunal en lo expositivo, las que en aras de la economía procesal se dan por reiteradas.

TERCERO: Que, la parte demandante evacuó el trámite de la réplica, reiterando los argumentos de hecho y derecho expuestos en su libelo y, agregó nuevos fundamentos, con la finalidad que se rechacen las excepciones y defensas expuestas por el demandado, los que se han detallado en lo expositivo de la presente sentencia, y que se tendrán por reproducidos en este acto.

CUARTO: Que la parte demandada evacuó la dúplica oportunidad en la que ratifica su defensa.

QUINTO: Que, se ha demandado la responsabilidad pecuniaria que le cabe al Fisco de Chile en el orden extracontractual, por los perjuicios morales sufridos por la demandante, motivados por los delitos de los que fue objeto, consistentes en haber sido detenida en el año 1973 por agentes del estado, en especial, funcionarios militares quienes en tal oportunidad, además, la sometieron a tratos degradantes y diversos actos de tortura afectando su esfera física, psicológica y sexual. Causando con ello, daños de importante entidad, cuyos efectos aun soporta, indicando asimismo, haber sido sometida a persecución política durante el periodo del gobierno de facto habido en nuestro país desde el año 1973, lo que



la perjudicó en diversos ámbitos de su vida, limitando sus oportunidades de vida, trabajo y desarrollo.

SEXTO: Que, en primer término es una doctrina ya asentada en nuestro país amparado en las normas internacionales junto con la interpretación armónica de las normas internas, que el Estado es responsable de las violaciones de derechos humanos al amparo del artículo 5° inciso segundo de la Constitución Política de la República que dispone *“El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”*, sin que le sea posible excusarse invocando derecho interno, atento a lo señalado en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, norma vigente en nuestro país, para de esa forma eludir sus obligaciones internacionales, pues de hacerlo, compromete su propia responsabilidad en ese ámbito. En especial, resulta comprometida la mentada responsabilidad cuando son sus mismos agentes quienes se encuentran a cargo del ejercicio monopólico de la fuerza coactiva, los que cometen actos contrarios a la dignidad y vida de los ciudadanos, desconociendo su rol esencial de protección y mantención de la seguridad pública nacional.

SÉPTIMO: En este entendido, resulta ser asimismo una obligación asumida por el Estado de Chile, tanto en razón de haber suscrito y ratificado la normativa internacional sobre Derechos Humanos entre las cuales se encuentran el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención de Viena, los Principios y Directrices Básicos Sobre El Derecho De Las Víctimas De Violaciones Manifiestas De Las Normas Internacionales De Derechos Humanos y De Violaciones Graves Del Derecho Internacional Humanitario, Declaración Internacional de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la Convención Contra la Tortura y otros Tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre otros, etc., así como, por la debida exégesis de las normas internas, que el principio de la reparación integral de las víctimas de delitos de lesa humanidad, se erige como un derecho incuestionable de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en orden a obtener la reparación íntegra de los daños sufridos con tales actos, debiendo además el Estado, garantizar el efectivo ejercicio de la acción destinada a la obtención de tal fin, garantizando el derecho a un recurso efectivo.

Desde la perspectiva de nuestro derecho interno, existe, asimismo, un



principio general de responsabilidad que pesa sobre el Estado emanado de la Ley 18.875 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que en su artículo 4 dispone, “el estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”.

De lo reseñado surge, por tanto, que, en términos generales, el daño moral cuya causa sea un delito calificado como de lesa humanidad, debe ser reparado de manera íntegra por el Estado.

OCTAVO: Que con el objeto de probar los fundamentos de su libelo la demandante se valió de prueba documental y testimonial. En relación a la primera acompañó a juicio, en forma legal y sin objeción de contrario los siguientes documentos: A folio 1, **a)** ejemplar de Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas de la Comisión Nacional sobre la Prisión Política y Tortura; **b)** certificado de matrimonio de la demandante; **c)** A folio 14, copia de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Órdenes Guerra y otros v/s Chile” de 29 de noviembre de 2018.-

II.- Testimonial: A folios 51[18E] y 67[10E], obtuvo la declaración de los testigos: **doña Sandra Elena Pardo Romero y doña Marlen Soledad Muñoz Pardo**, quienes legalmente interrogadas y sin tacha legal señalaron: la primera, en cuanto al punto uno de la interlocutoria de prueba que, conoce a Sonia Estrada hace como 25 años más o menos, porque su sobrina tiene una relación de pareja con un hijo de ella. En una oportunidad visitó a su sobrina en su casa en Chiguayante, no recuerda la fecha exacta. Llegó la señora Sonia, conversaron y de pronto ella comenzó a sentirse mal, comenzó a recordar lo que le había pasado y que constantemente tenía crisis porque había sido detenida, fue una “presa político” durante el Gobierno Militar. Les conversó que fue detenida junto a su esposo, fue golpeada, abusada, y siempre sufre de crisis de pánico, depresión, etc. Es una persona súper solitaria, siempre está con sus crisis de pánico y depresiva. Que siempre la había visto a ella como una persona solitaria, no una mujer normal, se nota que es una mujer que había sufrido mucho y en esa ocasión, al ver que había más personas, ella les relató lo que le había pasado; a ella le afecta estar rodeada de muchas personas. Se ve que ha sufrido mucho. Recuerdo que ella les contó que estuvo detenida varios días; que fue detenida por la CNI o la DINA. Fueron a sacarla de su casa, junto a su marido, dijo que fue golpeada y abusada. Repreguntada para que diga si sabe en qué fecha fue detenida la señora Sonia Estrada, responde que el día no recuerda pero dijo que fue en septiembre de 1973; que el marido de la señora Sonia se llama René



Castillo; que estuvo detenida como un mes más o menos, pero no recuerda mayormente; que no recuerda con exactitud en qué lugar permaneció detenida la señora Sonia, fue en Chillán.

Al punto dos de la interlocutoria de prueba señala que esto le ha producido daños a la señora Sonia. Sicológicamente ella no está bien. Ella quedó muy afectada con todo lo que le pasó; está con depresión hasta el día de hoy; está con ataques de pánico que le produjo la detención, los golpes y el ser abusada; a ella le afecta todo eso. Incluso a la señora Sonia le cuesta mucho socializar con las personas, por lo mismo. Además de eso, no sólo la detuvieron ese día y la dejaron tranquila, sino que continuaron las persecuciones a su marido y le costó mucho encontrar trabajo y todo eso. Repreguntada sobre los tipos de abusos sufrió la señora Sonia, responde que le dijo que fue golpeada y abusada sicológicamente, puede que sexualmente, pero no lo puede asegurar. También dijo que les hacía simulacros de fusilamiento y así los aterrorizaban; que los daños sicológicos productos de la detención, aún persisten ya que ella está con esos síntomas; ella vive encerrada en su casa, no sale de casa, vive encerrada ahí. Ni siquiera comparte mucho con su familia, que consta de 3 hijos nada más; está constantemente encerrada, es una mujer sumamente solitaria; le cuesta mucho compartir con las personas; que ella quedó así por todo lo que vivió; está con esos ataques de pánico hasta el día de hoy por todo eso que le sucedió a ella.

Al punto tres de la interlocutoria de prueba señala, que sí, cree que fue culpa del Estado al no protegerla y creo que debió haberla protegido más para que no pasara lo que pasó. Al punto cuatro de la interlocutoria de prueba se remite a lo que ya he declarado en los puntos anteriores.

El segundo deponente refirió al punto uno de la interlocutoria de prueba, que conoce a la demandante desde hace unos 25 años por el hecho de ser vecinos y tener gente conocida en común. A la demandada por las razones de este juicio. Sabe y le consta que la demandante sufrió mucho para el golpe militar, ya que estaba originalmente en el año 1973 residiendo en Chillán, y fue en ese mes de septiembre del señalado año que fue detenida por agentes del estado, representado por Carabineros de Chile, fue detenida a media noche junto a su marido René Castillo, irrumpieron en su domicilio los Carabineros amenazándola con metralletas y pistolas, delante de sus niños pequeños en ese momento, y se los llevaron así como estaban vestidos, con puro pijama. Los condujeron a la comisaría, los separaron y les hacen un interrogatorio que dura varias horas, hasta el otro día, por lo menos. En ese interrogatorio a ella, aparte de amenazarla, golpearla, le hicieron un simulacro de fusilamiento, y ella le dice que la manosearon y otras cosas que nunca ha contado. Lo mismo sufrió su esposo, por



lo que ella le dice, pero un poco más feroz los golpes, y la tortura, ya que también le hicieron el simulacro, lo mismo que a ella. Los sueltan, los liberan momentáneamente, y ahí empieza un hostigamiento, una persecución a esta familia completa, especialmente a Sonia Estrada. El motivo de la detención era porque ambos pertenecían al partido comunista y él era dirigente del sindicato de la IANSA de Chillán. Ellos, Sonia y su marido, después de todo este hostigamiento, decidieron irse de Chillán, arrancar en forma clandestina, poco menos, disfrazados para poder llegar a casa de un familiar acá en Talcahuano, a la casa de la madre de ella. Llegaron de Chillán para proteger a sus niños que eran pequeños y protegerse a ellos mismos, salvar sus vidas, se quedaron en Talcahuano, en casa de su madre, pero en varias ocasiones ella le cuenta que tuvieron que usar casas de otras personas para ir como escondiéndose, por el constante hostigamiento en ese momento de los agentes del estado, se imagina que, de la DINA, no sabe qué otros nombres tienen. En ese tiempo, ya habían detenido a don René, al esposo, que ya falleció, ya lo habían secuestrado aquí en Talcahuano, donde estuvo aproximadamente uno o más meses desaparecidos. Lo dejan después de ese tiempo, lo dejan con visibles torturas físicas y botado en la calle, desnudo. A ella la acosaban en los pocos trabajos que podía conseguir, acosaban a sus hijos en la calle, les preguntaban dónde estaban los papás, a qué hora llegaban, si ella estaba haciendo fila en algún lado por cualquier motivo aparecían los agentes y le decían que se fuera de tal parte que la estaban siguiendo, eso ella lo vivió muchos años, sumado a lo que le ocurría a su esposo, la persecución laboral que tuvo su marido igual, no encontraban trabajo y eso en definitiva afectó mucho psicológicamente a doña Sonia. Ella nunca ha contado completamente lo que le ocurrió, pero es evidente el daño que sufrió. Ella es una persona muy poco social. Ellos nunca supieron el sitio de su reclusión, pero decían que estuvieron cerca de una Universidad, cerca del aeropuerto, ya que sentían los aviones que despegaban. Pero exactamente no vieron su lugar de reclusión, porque estaban cubiertos. Repreguntada sobre en qué comuna de Chile ocurrieron los hechos que relata, responde que iniciaron en la comuna de Chillán y terminaron en la ciudad de Concepción.

Al punto dos de la interlocutoria de prueba que sí, se le causaron, especialmente daños psicológicos, a ella y a su marido, pero especialmente a ella, nunca se ha recuperado de lo que le ocurrió y ha vivido una constante vida enferma, enfermedad de depresión, ataques de pánico, crisis de angustia, no sociabiliza con las personas, y eso le ha afectado en todo tipo de relaciones, incluso con su propia familia directa. Su marido falleció en el año 2019, tras una larga enfermedad de fibrosis. Ellos como familia, nunca se recuperaron de esta



situación la verdad. Personalmente pude ver sus afecciones, por la falta de dinero, la falta de trabajo, casa propia, vivir constantemente cambiándose de domicilio porque, ellos ya estaban en una edad más adulta, y era evidente su estado psicológico de Sonia, René era un poco más positivo, pero después se enfermó. Entonces la familia completa sufrió todo este daño y la testigo veía a Sonia porque a veces le tocaba acompañarla a sus citas con el siquiatra o al médico. O a veces estaba sola y la iba a acompañar. Entonces lo vio directamente. Los montos los desconoce. Repreguntada para que diga si aparte de los daños psicológicos, la demandante sufrió otros daños físicos, responde que sí, sufrió daños de golpes, abuso de fuerza, puede ser también abuso sexual, no sabe si abuso sexual, cree que sí, por lo que ella le comenta y el simulacro de fusilamiento igual, cree que es una fuerza mal ejercida.

Al punto tres responde que sí, por supuesto, claramente, por todo lo antes declarado, a lo que se remite. Al punto cuatro de prueba señala que sí, claramente lo mismo que lo anterior, a lo que se remite a lo ya señalado. Si en resumen esto no hubiera ocurrido ellos habrían tenido una familia bien constituida, estabilidad laboral, lo que conlleva a un bienestar familiar y no hubiera sufrido el daño que le hicieron, más que nada psicológico a ella y a su familia. La conoce hace 25 años familiarmente, como vecinos del sector, tenía contacto con los hijos de ella.

NOVENO: Que, el Fisco de Chile, únicamente se valió de prueba documental, consistente en la obtención a folio 20, de un informe emitido por don Alexander Suarez Olivares, Jefe Departamento Secretaría General y Transparencia del Instituto de Previsión Social, sobre los beneficios reparatorios del Estado y los montos totales que ha obtenido la demandante en relación a las leyes 19.992 y 20.874.-

DÉCIMO: Que, las probanzas recién reseñadas valoradas conforme a las reglas contenidas en los artículos 342 N° 3, 384 N°2 del Código de Procedimiento Civil, 1698, 1699, 1700 y siguientes del Código Civil, permiten dar por legalmente acreditado que:

1.- En la madrugada del día 21 de septiembre de 1973 la actora, doña Sonia Estrada Parodi, la sazón de 26 años, dueña de casa, fue detenida junto con su marido, don René Castillo Soto, y sacado por efectivos de las fuerzas de orden y seguridad desde su casa en la comuna de Chillán, siendo trasladados hacia la comisaría de la ciudad, lugar en que fue separada de su marido, interrogada durante la noche, amenazada, golpeada, fue objeto de tocaciones inapropiadas y torturada psicológicamente, haciéndole creer que la iban a fusilar, realizando un simulacro en el que ella tenía los ojos vendados, con la finalidad coaccionarla para obtener indebidamente, información sobre la presunta existencia de armamento,



circunstancia que desconocía, siendo posteriormente dejada en libertad.

2.- Que, posteriormente, producto del acoso que sufría ella y su familia por partes de agentes del Estado, tuvo que trasladar su residencia a la comuna de Talcahuano, lugar en donde también fue blanco de vigilancia por agentes del Estado.

3.- Que con motivo de los actos asentados en los puntos anteriores, padecidos por doña Sonia Estrada de parte de agentes del Estado, experimentó sufrimientos físicos y psicológicos que afectaron el normal desarrollo de los diversos aspectos de su vida, y cuyos efectos nocivos permanecen hasta el día de hoy.

DÉCIMO PRIMERO: Que, la calidad de víctima de detención y actos de torturas de doña Sonia Estrada Parodi durante el año 1973 en que se funda la demanda, es un hecho que no ha sido controvertido por el demandado, sino, por el contrario, así lo ha reconocido de manera expresa al incluir a la señora Estrada Parodi de manera oficial como una de las afectadas por tales actos ejecutados por agentes dependientes del Estado, en el listado correspondiente de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura conocida como Comisión Valech. Tales hechos resultan probados asimismo, tanto de la copia del Informe de dicha comisión y sus listados anexos, acompañado a folio 1, en el que la actora figura bajo el número 8.136 del Primer Listado.

La misma conclusión es posible obtenerla, con el mérito del oficio remitido por el jefe del Departamento Secretaria General y Transparencia del Instituto de Previsión social don Alexander Suarez Olivares , adjunto folio 20, y mediante el cual se informa que la actora ha sido beneficiada por aportes de reparación en virtud de las leyes N° 19.992, y 20.874 en su calidad de víctima de prisión política y tortura, por un total de \$32.928.062, al día al 4 de junio de 2021.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, no cabe duda que los hechos que se han dado por asentados en el motivo que antecede, constituyen delitos de lesa humanidad, cuya verificación como se ha dicho en este fallo, compromete la responsabilidad del Estado de Chile por no respetar mediante los actos de sus propios agentes los derechos esenciales del sujeto afectado, como la seguridad personal, y libertad de la demandante, los que se encuentran amparados y garantizados en el texto constitucional nacional, e instrumentos internacionales como estipula la Convención Americana de Derechos Humanos en sus artículos 1.1 y 63.1 que prescriben que cuando ha existido una violación a los derechos humanos surge para el Estado infractor la obligación de reparar con el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

DÉCIMO TERCERO: Que, en este contexto, estimando incontrovertible la



responsabilidad que le asiste al Estado de Chile frente a los actos constitutivos de violación de los derechos humanos, surge la necesidad de determinar la concurrencia del daño moral cuya reparación se solicita, entendiendo al daño moral como aquella afectación, dolor, o sufrimiento que padece una persona por la concreción de los actos ilícitos, hiriendo la sensibilidad o sentimientos del afectado, lesionando sus legítimos intereses extrapatrimoniales. Siendo una postura unánime que tal daño debe ser probado. Es así que en el caso que nos ocupa, si bien expusieron dos testigos, lo cierto es que la primera resultó vaga en sus dichos, incurriendo en generalizaciones de las cuales deduce sus conclusiones más que en precisión y detalles directamente relacionados a la situación que afecta a la actora, a diferencia del segundo deponente, que se escuchó mejor informado, y dio razones de sus dichos, los que resultan más concordante con los hechos expuestos en el libelo de folio 1, constituyendo sus asertos, base de una presunción judicial, la que junto a los documentos ya detallados, posibilitan estimar como probado de manera suficiente el daño experimentado y su naturaleza. En efecto se pudo acreditar que doña Sonia Estada en razón de sufrir una detención ilegal y ser sometida a los tratos inhumanos y vejámenes que se han establecido en el motivo décimo, hubo de abandonar la ciudad de Chillán donde vivía, siendo permanentemente vigilada tanto ella como su entorno familiar por agentes del Estado. Coinciden además, las deponentes, en que estos hechos causaron sentimientos de tristeza, frustración, desazón y amargura que persisten a esta fecha.

Es más, y dada la naturaleza de los hechos que provocaron las afectaciones reseñadas, incluso resulta presumible la concurrencia de los daños y secuelas psicológicos alegados, atendida la naturaleza de los ilícitos y las circunstancias en que estos fueron ejecutados, en este caso por ejemplo, interrumpir abruptamente en el hogar y concretar la detención de los dos progenitores en frente de sus hijos.

DÉCIMO CUARTO: Que, por la esencia del daño moral la fijación del quantum no obedece a un simple cálculo aritmético, sino que debe atenderse a la extensión y gravedad de tal lesión, quedando su regulación entregada a la prudencia del juzgador para lo cual se atenderá al contexto en que se produjeron los hechos, la inexistencia de instancias de denuncia seguras, además de la imposibilidad de recurrir a las autoridades en búsqueda de protección, así como la privación de un justo proceso, aspectos que llevarán a fijar la como una justa reparación y satisfacción de reemplazo de acuerdo al mérito del proceso, la suma de \$7.000.000.- más reajustes de acuerdo a la variación experimentada por el Índice de Precios y los intereses corrientes, calculados ambos, desde la fecha en



que esta sentencia tenga el carácter de firme y ejecutoriada y la fecha del pago.

DÉCIMO QUINTO: Que, sobre las excepciones opuestas por el Fisco de Chile, es necesario en primer término señalar que es un hecho legalmente probado mediante documento público como lo es el oficio ORD.: DSGT N°4792-1815, emanado del Instituto de Previsión Social, que la actora ha obtenido beneficios reparatorios por parte del Estado, consistentes en Pensión de la Ley 19.992; aporte único de la Ley 20.874 los que a la fecha de emisión del documento alcanzaban una cantidad total de \$32.928.062.- Tal circunstancia, constituye el fundamento de la excepción de reparación integral del daño alegada por el Fisco, en cuya virtud sostiene la improcedente de la indemnización demandada por haber sido ya reparado el actor por el daño sufrido, al haber el Estado previsto y otorgado diversos beneficios pecuniarios, asistenciales y derechos a las víctimas directas y su familia en caso de lesiones a los derechos humanos como lo es en este caso.

Sobre el particular, tales beneficios resultan ser un esfuerzo del Estado en orden a reconocer las afectaciones causadas, pero en ningún caso significan la imposibilidad de conceder reparaciones económicas por la vía judicial respecto del daño moral, dada la inexistencia de prohibición o incompatibilidad al respecto que hubiese sido establecida por el legislador o, por ser las primeras de carácter asistencial, distinto a la naturaleza netamente reparatoria de la indemnización de perjuicios reclamada. Es más, la ley 19.123 en su artículo 24 establece que la pensión que se otorga es compatible con otros beneficios que puedan corresponder al beneficiario. Del mismo modo la Ley 19.992 artículo 4° establece la compatibilidad de la pensión que otorga con cualquier otra o con otro beneficio de seguridad social que se le otorgue al beneficiario. Las anteriores son razones suficientes para desestimar la excepción en comento.

DÉCIMO SEXTO: Que, en relación a la excepción de prescripción deducida en subsidio, en base a los artículos 2332 y 2515 del Código Civil, es posible indicar que el carácter imprescriptible de la acción civil que nace de los ilícitos constitutivos de delitos de lesa humanidad deriva de las normas internacionales que promueven y obligan la responsabilidad del Estado la que se vería gravemente lesionada de aplicar la normativa interna aplicando lisa y llanamente las normas de prescripción de la acción civil, pues limitaría el derecho a la reparación integral y al efectivo ejercicio de la acción para reclamarlo de que goza el afectado, derechos contemplados en la normativa internacional, que en definitiva se integra como norma interna por expresa disposición del artículo 5 inciso segundo de la Constitución Política de la República. Resultando consecuente además con la imprescriptibilidad de la acción penal para perseguir



tales delitos, resultando como corolario de lo dicho, el rechazo de la excepción de prescripción opuesta de manera subsidiaria.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, estando asentado que los diversos beneficios otorgados por el estado son perfectamente compatibles con la indemnización demandada, y que los mentados beneficios no significan en ningún caso una doble reparación, se estima que el monto que en vista de los principios de equidad y prudencia ha sido fijado cumple con el objetivo de ser una justa e integral reparación, la que no debe ser reducida como ha solicitado el Fisco de Chile.

DÉCIMO OCTAVO: Finalmente, en cuanto a los reajustes e intereses, estos deberán ser determinado en su oportunidad por el Sr. Secretario del Tribunal a través de la Unidad de liquidaciones, en base a lo considerado en el motivo décimo cuarto del fallo, procurando de esta forma mantener el valor real de la prestación otorgada frente a los fenómenos de inflación que se presentan.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 5 inciso 2° de la Constitución Política de la República; 1698 del Código Civil, 144, 160 y 170 del Código de procedimiento Civil, **SE RESUELVE:**

1.- Que, **se acoge**, a la demanda de indemnización de perjuicios en base a responsabilidad extracontractual interpuesta a folio 1 por el abogado don Juan Pablo Gallardo Parada en representación de doña **SONIA ALICIA ESTRADA PARODI**, en contra del **FISCO DE CHILE**, y en consecuencia, se declara que el demandado deberá pagar al actor por concepto de reparación del daño moral padecido la suma total de **\$7.000.000.-** más reajustes e intereses corrientes calculados de la forma como se indicó en el motivo décimo cuarto de esta sentencia.

2.- Que, **no se condena** en costas a la parte demandante por estimar que ha tenido motivos plausibles para litigar.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

ROL N° C-511-2021.-

DICTADA POR DOÑA CAROLINA VASQUEZ EPUÑAN. JUEZ TITULAR.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del artículo 162 del Código de Procedimiento Civil. En Chillán, a **dieciocho de mayo de dos mil veintidós**.





Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.

A contar del 03 de abril de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>